

Representaciones mediáticas del movimiento piquetero en una etapa expansiva: Tartagal y Mosconi en el año 2000.

José Daniel Benclowicz.

Cita:

José Daniel Benclowicz (2013). *Representaciones mediáticas del movimiento piquetero en una etapa expansiva: Tartagal y Mosconi en el año 2000. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-010/818>

**XIV Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia
2 al 5 de octubre de 2013**

ORGANIZA:

Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional de Cuyo

Número de la Mesa Temática: 95

Título de la Mesa Temática: Luchas sociales en la historia argentina reciente:
experiencias, debates y representaciones

Apellido y Nombre de las/os coordinadores/as: Aiziczon, Fernando y Benclowicz, José

**REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS DEL MOVIMIENTO PIQUETERO EN
UNA ETAPA EXPANSIVA: TARTAGAL Y MOSCONI ENTRE LOS AÑOS 2000
y 2001**

José Benclowicz (IIDyPCa-CONICET/UNRN)

jd.benclowicz@gmail.com

Introducción

Desde su entrada en escena en la pueblada de Cutral-Co y Plaza Huincul de 1996, lo que poco después se designaría como movimiento piquetero llamó la atención en la academia y en la opinión pública en general tanto por su perfil combativo como por el papel protagónico que empezaban a desempeñar los trabajadores desocupados. La masividad del movimiento y radicalidad de sus métodos, que refiere a una situación socialmente desesperada y a la existencia de una dilatada experiencia de luchas y

organización, entre otros elementos, favorecieron la conquista de una amplia visibilidad. Ésta fue acompañada lógicamente por la construcción de representaciones destinadas a catalogar la novedad, que hacia finales de la década de 1990 se había extendido a lo largo y a lo ancho del país.

Ese momento, que coincide con el ascenso de un nuevo gobierno a nivel nacional -el de la Alianza UCR-Frepaso-, aparece retrospectivamente como el del inicio de un proceso de agravamiento de la crisis política y económica y de exacerbación de la lucha de clases, y constituye el punto de partida del presente trabajo, donde propongo una aproximación a la evolución de las representaciones hegemónicas sobre el movimiento piquetero en la Argentina. Se trata de analizar el modo en que fueron evolucionando los discursos más difundidos sobre uno de los principales fenómenos de la lucha social entre finales de la década de 1990 y principios de la siguiente, período en el que se registra un progresivo incremento de la conflictividad social, que desembocó en el “Argentinazo” del 19 y 20 de diciembre de 2001. Para eso, me centro en un caso altamente significativo: el de las localidades salteñas de Tartagal y Mosconi, donde el movimiento piquetero tuvo un amplio desarrollo y una fuerte influencia, protagonizando tres puebladas de carácter sumamente radicalizado a lo largo de esos años: en mayo y noviembre de 2000, y en junio de 2001. Estas protestas involucraron cortes de ruta que fueron reprimidos por las autoridades, generando fuertes choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes y rebeliones populares masivas, que desarrollaron ampliamente prácticas asamblearias y desconocieron a las autoridades locales.

El estudio se basa principalmente en un análisis en profundidad de la totalidad de las noticias publicadas en el diario *Clarín*, que cuenta con la mayor tirada a nivel nacional, referidas a esas tres rebeliones populares. A su vez, contrasto ese *corpus* con el de los artículos informativos del diario *El Tribuno*, que debido a su anclaje provincial es el que mayor cobertura ofreció sobre los acontecimientos en cuestión.

En base a una estrategia teórico metodológica que sigue los principales aportes del Análisis Crítico del Discurso, y que fue expuesta detalladamente en otro trabajo (Benclowicz, 2013a), abordo el examen de las noticias tanto en sus aspectos formales como de contenido, teniendo en cuenta que la construcción de los acontecimientos por parte de la prensa tiene un carácter necesariamente ideológico, que determina una codificación específica de los hechos a los que se alude (Van Dijk, 1990, 2008; Verón, 1993). Tal codificación está relacionada a su vez con el contexto en el que circulan los discursos, que involucra prácticas sociales más amplias en relación con las prácticas discursivas bajo examen (Fairclough, 1993), en esta línea, el examen de los artículos

periodísticos que aquí realizo se sostiene sobre una vasta investigación histórica y sociológica (Benclowicz 2013b).

Dentro de los límites de cada artículo, es posible visualizar una *táctica discursiva* que se despliega más allá de las intenciones de los periodistas que intervinieron en su redacción. Para eso, se consideran las distintas representaciones específicas que aparecen -que pueden ser variadas y hasta contradictorias-, y la posición predominante en cada texto, que en términos generales puede ser a favor o en contra de los manifestantes y sus acciones. A su vez, el análisis cualitativo y cuantitativo del conjunto de noticias referidas a un conflicto en particular, arroja luz sobre una *estrategia discursiva* determinada, donde distintas tácticas se fortalecen, resignifican, pasan a un segundo plano, entran en contradicción. Finalmente, la consideración de los discursos sobre conflictos sociales diferenciados, registrados en un mismo espacio y a lo largo de un lapso acotado, permite estudiar la evolución de esas estrategias, lo que constituye un capítulo importante de la dinámica de la lucha de clases. Resulta pertinente entonces referirse antes que nada a este último punto.

Contexto sociopolítico de las representaciones sobre el proceso de lucha de mayo de 2000 a junio de 2001

Las puebladas que se registraron en la zona entre mayo de 2000 y junio de 2001 forman parte de un proceso de lucha más amplio, que se puede remitir por lo menos a la venta de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), a principios de la década de 1990, bajo el gobierno peronista de Carlos Menem. YPF resultó central económica y socialmente en localidades como Tartagal y Mosconi, y su privatización generó importantes resistencias antes y después de la emergencia del movimiento piquetero. Los principales antecedentes del proceso de lucha 2000-2001 fueron las puebladas de septiembre de 1991 y de mayo de 1997; la primera contra la privatización de YPF, la segunda contra sus efectos sociales, que se tornaron insostenibles por ese entonces (Benclowicz, 2011a). La rebelión popular de 1997 sostuvo un bloqueo comunitario de la ruta nacional N° 34 durante siete días, a lo largo de los cuales se desarrollaron Asambleas Populares masivas en cuyo seno se conformó el movimiento de trabajadores desocupados de la zona. La protesta fue desactivada después de fuertes amenazas de desalojar la ruta por la fuerza y del otorgamiento por parte de los gobiernos nacional y provincial de un número importante de planes sociales, entre otras

concesiones, que fueron cumplidas sólo parcialmente e hicieron lugar, entre otras razones, al proceso de lucha que aquí nos ocupa.

A finales de 1999 se produjo un recambio político a nivel nacional con el ascenso del gobierno de la Alianza, conformada por la UCR (Unión Cívica Radical) y el FrePaSo (Frente País Solidario). El gobierno aliancista redujo significativamente la cantidad de planes sociales; de ese modo, los acuerdos previos firmados con los manifestantes no fueron cumplidos, lo que motivó nuevos cortes de ruta en marzo y abril de 2000. A eso se le agregaron la falta de pago de los planes para desocupados, amenazas de desalojo por falta de pago de alquileres y el reemplazo de parte del sueldo de los empleados municipales por vales de alimentos (Oviedo, 2001). En ese contexto, fue madurando un clima de agudo descontento y el 2 de mayo, tras la instalación de una Olla popular frente a la municipalidad de Mosconi, se inició un corte de la ruta N° 34, a la altura de esa localidad.

La medida se sostuvo a pesar de la orden de desalojo impartida por la justicia federal y de las amenazas de represión de la protesta, concitando un creciente apoyo de la población local. Hacia el 8 de mayo, comenzaron a aparecer versiones en los medios sobre la presencia de grupos armados entre los manifestantes, difundidas entre otros por el ministro del Interior de la Nación, Federico Storani. Un día después, en circunstancias muy dudosas, murieron dos piqueteros que habían ido en camioneta a buscar cubiertas para quemar en el piquete. Los distintos dirigentes de las organizaciones de desocupados que fueron entrevistados aseguraron que fueron asesinados por la policía provincial. Hacia el 11 de mayo, comenzó a circular el rumor de que era inminente el avance de tropas de Gendarmería Nacional y de la Policía provincial. Ante esa situación, las comunidades de Tartagal y Mosconi se organizaron para apoyar y defender el corte: en la primera localidad, distintas radios y el canal de cable local informaban permanentemente sobre la situación; en Mosconi, la sirena del cuerpo de bomberos era activada cada vez que se suponía se acercaban las fuerzas represivas, y miles de pobladores se volcaban a la ruta.

El 12 de mayo a la madrugada se produjo la represión. Después de poco más de una hora de intensos enfrentamientos, que incluyeron la quema de dos camiones que fueron utilizados como barricadas, la mayor parte de los manifestantes retrocedió hacia el pueblo de General Mosconi. Cuando empezó a amanecer, la Policía de la provincia ingresó al pueblo en busca de los manifestantes y comenzó a allanar el hospital y domicilios particulares donde presuntamente se habían refugiado, utilizando gases lacrimógenos y balas de goma y de plomo. Ese hecho terminó por provocar un

estallido popular que superó en envergadura y profundidad a los que ya se habían producido en la zona. La población de Mosconi comenzó a volcarse a las calles. Un grupo marchó hacia las formaciones de la Policía enarbolando la figura de una virgen; poco después, un conjunto de manifestantes tomó la comisaría local. La Policía se encontró superada varias veces en número y debió retirarse del pueblo, replegándose hacia la ruta, donde permanecían las tropas de Gendarmería. En ese contexto, se produjeron distintos ataques dirigidos a los símbolos del poder político y económico: la Municipalidad fue destruida e incendiada; lo mismo sucedió con un cajero automático del banco Macro, ex banco de la Provincia. Poco después, los pobladores se encaminaron hacia la ruta. Mientras tanto, en Tartagal, apenas se conocieron los acontecimientos, sucedió otro tanto: miles de personas salieron de sus casas –más de 10 mil personas según *Clarín*, más de 20 mil según *El Tribuno*–, marcharon los siete kilómetros que los separaban de Mosconi para unirse a otros manifestantes y enfrentarse conjuntamente a las fuerzas represivas, que fueron obligadas a retroceder. Si se considera que la población total de Tartagal y de Mosconi ascendía a 60.585 y 19.811 habitantes respectivamente (INDEC, 2001), se puede advertir la masividad de la pueblada.

La ruta quedó bajo el control de los manifestantes, quienes tras deliberar en asamblea elaboraron un extenso pliego de reclamos. El petitorio definitivo tenía 31 puntos; algunos recuperaban lo acordado e incumplido desde la última pueblada; otros, como la exigencia de 15.000 puestos de trabajo genuino para el departamento San Martín, iban más lejos. Entre las reivindicaciones que se retoman, caben desatacar la demanda de un fondo de reparación histórica y la triplicación de las regalías hidrocarburíferas para los municipios productores de la zona. Finalmente, tras una larga negociación entre los representantes de los manifestantes y de los gobiernos nacional y provincial que se extendió a lo largo de la noche del 13 y la madrugada del 14 de mayo, en la que fueron concedidos numerosos reclamos, la protesta fue levantada.

El 30 de octubre de 2000 se inició un nuevo corte de la ruta nacional 34 a la altura de Tartagal. Al incumplimiento en general por parte del poder político de lo acordado en los conflictos anteriores, se sumaron en esta oportunidad distintas la disminución del estipendio y de la cantidad de planes sociales, el despido de trabajadores de una contratista de la empresa de electricidad EDESA, y de la empresa de transportes Atahualpa. Por último, las comunidades indígenas se organizaron para reclamar la participación en los programas de ayuda social de la provincia y la titularización de las tierras, prometida en el contexto de las puebladas de mayo de 1997

y de 2000 pero concretada sólo sobre una porción menor. Así, en el corte confluyeron las comunidades aborígenes, las organizaciones de desocupados y los delegados y trabajadores despedidos de EDESA y Atahualpa. La protesta se produjo en un contexto nacional caracterizado por un alza de las luchas, especialmente, de los cortes de ruta. A principios de noviembre, llegaron a producirse catorce bloqueos de rutas protagonizados principalmente por trabajadores ocupados y desocupados. Entre los piquetes más importantes se contaban los de Salta, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Chaco y varias localidades de la provincia de Buenos Aires; el de mayor envergadura se desarrollaba en La Matanza. Cabe mencionar que en ese contexto las organizaciones de desocupados del norte de Salta lanzaron desde el corte de ruta una de las primeras convocatorias para conformar la Coordinadora Nacional de Piqueteros, iniciativa concretada medio año después.

Después de varios días de lucha durante los que la ruta 34 permaneció cortada a la altura de Tartagal, el gobierno provincial logró dividir a los manifestantes, ofreciendo a los dirigentes indígenas negociar por separado la cuestión de las tierras. En ese contexto, el 9 de noviembre las organizaciones de desocupados y los trabajadores despedidos se trasladaron hacia Mosconi y reinstalaron el piquete a la altura de esa localidad. Al día siguiente, poco antes del amanecer, en función de una orden de desalojo, la policía de la provincia avanzó sobre el piquete de los desocupados y mató a un manifestante con un arma cargada con balas de plomo. Se trataba de Aníbal Verón, un ex trabajador de la empresa Atahualpa que había sido despedido un año antes y a quien se le adeudaban varios meses de sueldo. La represión y el asesinato de Verón terminaron por desencadenar sendas puebladas en ambas localidades. En Mosconi, donde los símbolos del poder político y económico habían sido arrasados en mayo, fue copada la comisaría y cuatro policías fueron tomados de rehenes. Los agentes fueron liberados más adelante tras la intermediación de dirigentes de las organizaciones de desocupados, que impidieron que la furia popular se descargase sobre ellos, con las previsibles consecuencias del caso. El grueso de los manifestantes se reagrupó en la ruta y avanzó hacia Tartagal. La policía se replegó rápidamente y se refugió en el Regimiento N° 28, del Ejército. Junto a la entrada a la ciudad, fue apedreado el hotel Pórtico Norte, donde se alojaban los negociadores enviados por el gobierno provincial y el intendente interventor de Tartagal, designado después de la pueblada de mayo.

La noticia del asesinato de Verón se conoció a la mañana, y para ese momento a los manifestantes originales se sumaron muchos más, que recorrieron las calles céntricas de Tartagal atacando en primer término los edificios públicos. La comisaría

fue copada, destruida y finalmente incendiada; también fueron atacados la Municipalidad, el Banco Nación y la sede de Acción Social, donde se encontraron y llevaron colchones, colchas y bolsones de mercaderías que permanecían sin distribuir. Además de estos y otros edificios públicos, los manifestantes destruyeron la corresponsalía del diario *El Tribuno* -propiedad del gobernador-, las sedes de Edesa y de Atahualpa, y la oficina de un diputado del PJ. Estos acontecimientos se desarrollaron durante la mañana. Por la tarde, cuando el grueso de los piqueteros había regresado a la ruta y reinstalado los piquetes, se produjeron saqueos selectivos a dos comercios tartagalenses y al depósito judicial, de donde fueron extraídas distintas armas. Diversos informantes, incluyendo los sectores empresariales afectados, coinciden en desligar a las organizaciones de desocupados de estos últimos hechos, vinculando al poder político provincial y local. Después de producidos esos saqueos, la Gendarmería comenzó a patrullar las calles de Tartagal. En esta oportunidad, a las reivindicaciones que venían levantando las asambleas, se sumó el reclamo de renuncia del gobernador y de otras autoridades provinciales. Sin embargo, los saqueos y la sensación de descontrol habían dividido a la comunidad, y el corte fue levantado el día 13, tras la firma de un acuerdo que implicaba un compromiso menor con respecto a los que habían asumido las autoridades previamente.

Tras el levantamiento del corte, las organizaciones de desocupados conformaron la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del departamento de San Martín. Durante los primeros meses de 2001, la Coordinadora desplegó una importante actividad. Una de sus acciones más destacadas fue la instalación de piquetes sobre las compañías petroleras y contratistas de servicios para lograr la incorporación de personal y aumentos de salarios. A su vez, en ese período se organizaron movilizaciones a las sedes locales de los sindicatos de la construcción y de petroleros privados, que se habían abstenido de participar en el proceso de lucha. Como consecuencia de esas protestas, los manifestantes impusieron la destitución del responsable local del gremio de la construcción. De este modo, la Coordinadora departamental se perfiló como eje de reagrupamiento del movimiento obrero, planteado la acción conjunta de los trabajadores ocupados y desocupados, y se convirtió en una interlocutora ineludible para las empresas a la hora de incorporar personal y negociar salarios. El movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi estaba en alza, en un contexto en el que la crisis económica y política a nivel nacional y provincial se aceleraba. En marzo de 2001 renunciaron dos ministros de Economía— José Luis Machinea y Ricardo López Murphy, que permaneció apenas una semana en el puesto—, y asumió Domingo Cavallo, que había ocupado ese cargo durante el mandato de Carlos Menem.

En mayo, los obreros que estaban construyendo el hospital de Mosconi –que habían conseguido ese trabajo a partir de la lucha piquetera– declararon una huelga con el apoyo de las organizaciones de desocupados exigiendo aumento de salarios. Después de catorce días de huelga, el conflicto derivó en un nuevo corte de ruta. A los pocos días de establecido el bloqueo, la justicia ordenó la captura de distintos dirigentes piqueteros y de partidos de izquierda acusados de “corte de ruta”, “sedición” y “ejercer la democracia semidirecta”, en referencia a los piquetes y a la resistencia a la represión y las asambleas populares realizadas en las protestas previas. Ante la detención de distintos dirigentes, el movimiento respondió convocando a un paro general en todo el departamento para el 5 de junio, y fortaleció los piquetes. Después de casi tres semanas de corte, el 17 de junio la Gendarmería atacó sorpresivamente a los manifestantes. El gobierno difundió en los medios que había piqueteros armados y francotiradores, a partir de lo cual se justificó la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas. En esa línea, se difundió una versión que hacía aparecer a los piqueteros como “subversivos”; el secretario de Seguridad del gobierno nacional denunció la intervención de activistas “perfectamente entrenados”, y fuentes de inteligencia llegaron a sugerir conexiones con las FARC colombianas y con la organización Sendero Luminoso, de Perú. Más adelante, un jefe de Gendarmería reconoció que los únicos extranjeros que encontraron en la zona eran los ejecutivos de las empresas petroleras y el juez que entendió en la causa admitió que ninguna de las personas detenidas portaba armas.

En el marco de esa atmósfera, la Gendarmería ingresó a Mosconi, disparando con munición de guerra, lanzando gases lacrimógenos, provocando destrozos y realizando durante dos días allanamientos indiscriminados. El mismo 17 de junio y sobre todo a partir del día siguiente la plaza del pueblo se convirtió en el principal foco de resistencia, al congregarse una importante cantidad de pobladores. Mientras tanto, Mosconi permanecía sitiada por los gendarmes. Los habitantes de Tartagal se solidarizaron con sus vecinos e incluso, los gendarmes que sufrieron heridas debieron ser trasladados al departamento de Orán, porque los enfermeros del hospital de Tartagal se habrían negado a atenderlos. En esa instancia, signada por la multiplicación de marchas, cortes de ruta, protestas y pronunciamientos de repudio a la represión y al gobierno en todo el país, las autoridades se vieron forzadas a moderar las acciones de la Gendarmería. La represión había causado dos muertes, decenas de heridos de bala y de detenidos, muchos de los cuales, según se denunció, sufrieron golpizas, distintos tipos de torturas –incluida la picana eléctrica– y simulacros de fusilamiento (Díaz Muñoz, 2005).

A diferencia de las puebladas anteriores, en este caso no se registra un acuerdo que ponga fin al conflicto, por lo que la protesta persistió con un carácter defensivo y se fue diluyendo lentamente. El 21 de junio arribó una delegación de organizaciones de derechos humanos, legisladores, sindicatos y distintos partidos políticos, que encabezaron junto a los dirigentes piqueteros una asamblea multitudinaria en la plaza. Después de eso, se desarrolló durante varios meses la llamada “plaza del aguante”, donde, instalados en carpas, como forma de protesta, residieron distintos dirigentes de las organizaciones de desocupados; allí se realizaron distintas asambleas, actos y actividades, a las que se acercaron dirigentes políticos y sociales de todo el país. Por otra parte, el 24 de julio se realizó la Primera Asamblea Piquetera Nacional, que reunió por primera vez, en la localidad bonaerense de La Matanza, organizaciones de todo el país. La Asamblea votó un combativo plan de lucha. Esas luchas presionaron y contribuyeron a la liberación de los dirigentes piqueteros del departamento de San Martín, a pesar de la gravedad de los cargos que enfrentaban. Dos meses después de la Primera Asamblea Nacional Piquetera, en septiembre de 2001, se realizó la segunda, y el movimiento se consolidó en la mayor parte del país, convirtiéndose en la principal fuerza de oposición al régimen. Para ese entonces, la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del norte de Salta se había disuelto. Visto el proceso de conjunto, la pueblada de 2001 cierra un ciclo en la historia de las luchas de la región. Así como Tartagal y Mosconi principiaron el progresivo ascenso de las luchas sociales y políticas que se produjo a nivel nacional, se anticiparon también a su reflujo, permaneciendo prácticamente pasivas durante la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y la conformación de las asambleas populares en las principales ciudades del país, a principios de 2002.

Momento y lugar de las representaciones

Las acciones de lucha protagonizadas por los trabajadores desocupados que sintetice en el apartado anterior llegaron a constituirse en el centro de la agenda mediática, dando lugar al despliegue de un conjunto de representaciones sobre las acciones y sus protagonistas, distribuidas en distintos artículos informativos que conforman el *corpus* del presente trabajo.

En las protestas del año 2000 es posible identificar tres periodos claramente diferenciados: el primero comprende los días transcurridos entre el comienzo del corte y el momento previo a la represión; el segundo se inicia con la represión y se extiende

hasta el momento de la firma del acuerdo de los manifestantes con las autoridades; y el tercero es el que se abre con la resolución temporaria del conflicto, de este último considero el día posterior al acuerdo. Para el conflicto de junio de 2001 sólo se pueden establecer con claridad los dos primeros, ya que como se dijo, no hay una resolución puntual. La ubicación de las noticias según períodos permite identificar el modo en que se van modificando las representaciones en función de los acontecimientos y del momento de la lucha. El cuadro general de noticias considerando el período en que fueron publicadas es el siguiente:

Cuadro 1. Frecuencia de notas según conflicto, período y duración del período. Diarios *Clarín* y *El Tribuno*

Diario y Protesta	1° período		2° período		3° período		Totales	
	Notas	Días	Notas	Días	Notas	Días	Notas	Días
<i>Clarín</i>								
Mayo 2000	5	10	14	1	8	1	27	12
Noviembre 2000	6	10	14	3	3	1	23	14
Junio 2001	3	18	29	4	0	0	32	22
<i>El Tribuno</i>								
Mayo 2000	48	10	34	1	13	1	95	12
Noviembre 2000	14	10	32	3	11	1	57	14
Junio 2001	17	18	58	4	0	0	75	22

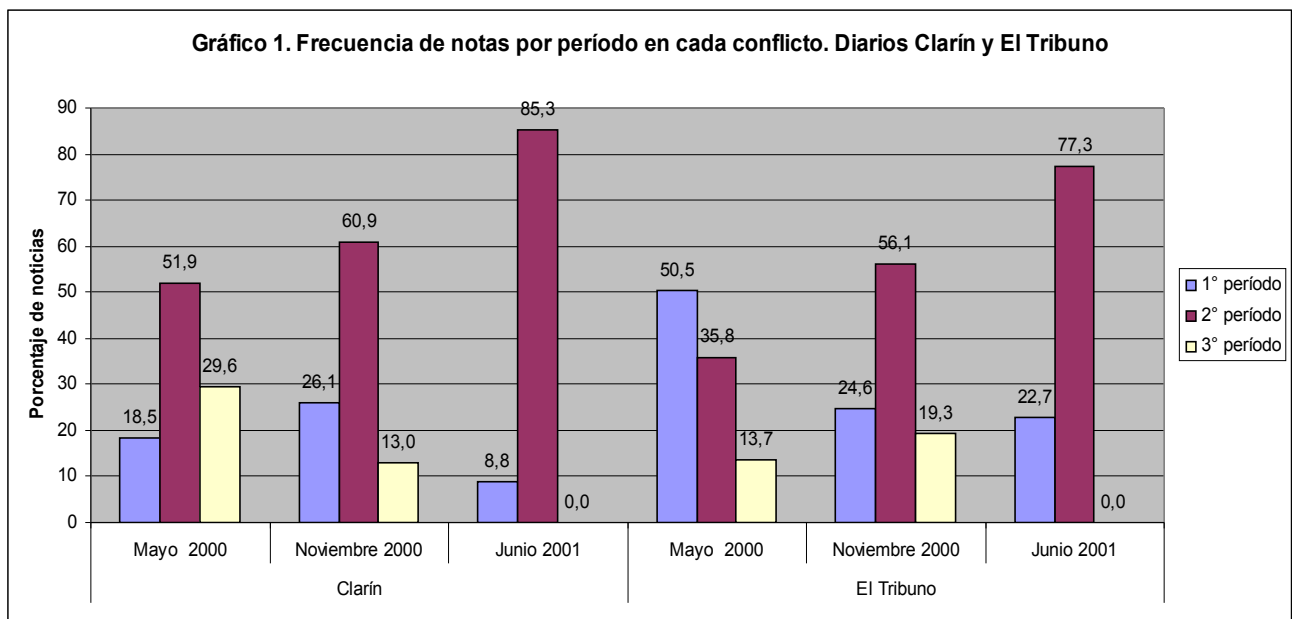
Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín* y *El Tribuno*.

Además del momento, es preciso tener en cuenta el lugar de las noticias, tanto en el sentido de la cantidad de espacio que ocupan, lo que determina la relevancia que le otorga el periódico, como en lo relativo a la ubicación específica de los artículos informativos dentro del diario. Como es de esperar, el segundo período es el que concentra, en las tres protestas y en los dos periódicos, el mayor número de noticias de alta relevancia, las cuales que ocupan más de la mitad de página y muchas veces son publicadas en páginas impares. La elevada “noticiabilidad” de los acontecimientos registrados en el segundo período de las protestas explican satisfactoriamente este hecho.

En lo que hace a la ubicación específica de los artículos informativos es preciso apuntar que en el caso de *Clarín*, todas las noticias, sin importar el período, fueron publicadas en la sección *Política*, lo cual indica una primera representación general de las protestas. No se trata para el diario más influyente del país de hechos policiales, sino

que sucesos vinculados a los cortes de ruta y puebladas de Tartagal y Mosconi son presentados siempre como acontecimientos políticos. Esta primera constatación no es una cuestión menor, habida cuenta de la tendencia a criminalización de la protesta social que se aceleró desde finales de la década de 1990. Por su parte, *El Tribuno* ubica la sus artículos informativos sobre el tema en la sección Nacionales o Provinciales, dependiendo en general de la magnitud que cobra el conflicto.

Dicho esto, veamos como se distribuyen porcentualmente las noticias teniendo en cuenta los distintos períodos de la lucha:



Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín* y *El Tribuno*.

Durante el primer período de las luchas, que como se desprende del Cuadro 1 es el más prolongado, *Clarín* le otorga poca importancia al conflicto, absteniéndose de comentarlo en cualquier sentido en varias ediciones. El porcentaje de artículos informativos destinados a dar cuenta de la protesta en su primera etapa oscila en este caso entre el 8 y el 26 por ciento del total de las notas, lo que resulta similar a los números del día que sigue a la resolución del conflicto, que concentra entre el 13 y el 29 por ciento de las notas en un sólo día. En el segundo período, que comprende las acciones represivas y las puebladas, se concentran el grueso de las noticias del diario nacional, y es el momento en que los sucesos llegan a la portada. Este hecho se vincula indudablemente al carácter de los propios acontecimientos en este período, que involucran verdaderas noticias en el sentido de novedades relevantes de la realidad

política que, siguiendo los más elementales criterios periodísticos, deben informarse y destacarse. Por otra parte, hay que señalar que el propio carácter de periódico nacional le impide a *Clarín* por una cuestión de espacio dar cuenta con detalles de todos los conflictos que estallan en el país.

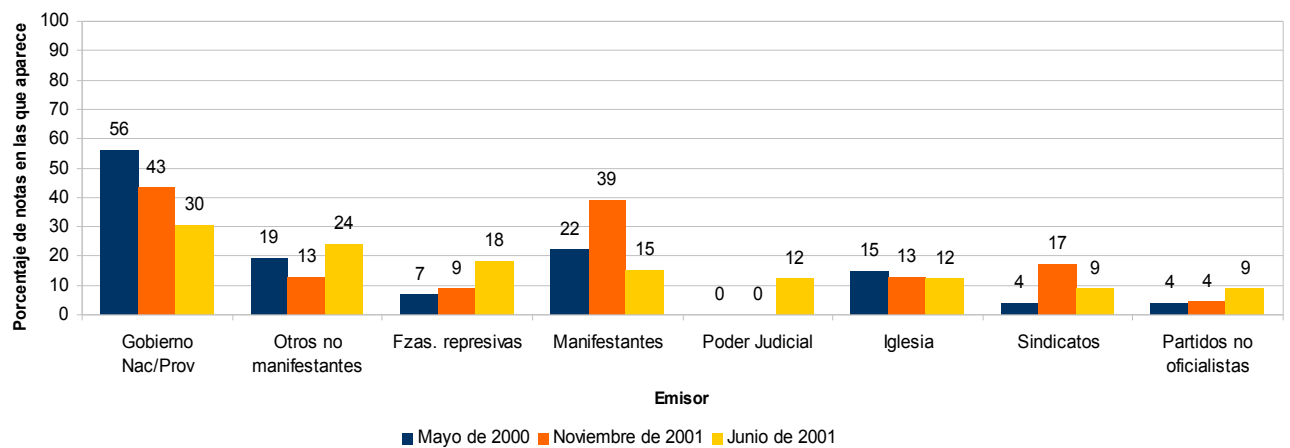
Con todo, el hecho que más de la mitad de las noticias se agolpen entre uno y cuatro días según cada conflicto, nos habla de una construcción de lo noticiable basado en criterios de espectacularidad. Una protesta que impone durante varios días la interrupción del tránsito en una ruta nacional no deja de ser un acontecimiento político relevante, que podría ser objeto de numerosos artículos periodísticos. De hecho, ese es el caso de *El Tribuno* en el corte de ruta de mayo de 2000, que publica la mitad de sus notas en el primer período. Esto puede entenderse si se tienen en cuenta el carácter provincial de este último periódico, lo que lo convierte, en principio, en un medio que informa sobre una mayor cantidad y variedad de acontecimientos acaecidos en Salta que *Clarín*. Semejante distribución de la información puede favorecer una representación del conflicto como sorpresivo e inexplicable en el caso del diario nacional, y como un desenlace de acontecimientos previos en el caso de *El Tribuno*. Sin embargo, la confrontación de estos datos con el análisis del contenido de las notas desmiente esa impresión, como se verá en seguida. Más allá del alcance de cada diario, un dato que no puede dejar de considerarse es el hecho de que *El Tribuno* es propiedad de la familia Juan Carlos Romero, gobernador de Salta cuando se desarrollaron las luchas en cuestión, lo que incidirá claramente en las orientaciones de las notas. Más allá de eso, ya en el conflicto de noviembre de 2000 el porcentaje de notas del periódico salteño publicadas durante el primer período es similar al de *Clarín*; es necesario entonces no posponer el análisis del contenido de las notas.

Voces autorizadas, reclamos y causas del conflicto

Vinculado al contenido general de los artículos, es pertinente relevar antes que nada qué sujetos tienen voz y con qué frecuencia. La presencia de determinados emisores y la ausencia de otros sugiere quiénes son los actores legitimados para expresarse, por lo que resulta particularmente relevante la frecuencia de aparición de voces de los manifestantes, independientemente del sentido que cobran sus palabras en el texto, y de la fuerza cuestionada, es decir de los diferentes referentes del Estado. Teniendo en cuenta las protestas en cuestión, aparecen, además de los periodistas que intervienen en la redacción de las notas, los siguientes emisores: funcionarios y

legisladores de partidos de gobierno a nivel nacional o provincial; funcionarios del poder judicial (jueces, fiscales, etc.); manifestantes; referentes de la Iglesia; dirigentes sindicales no participantes de las acciones; dirigentes políticos provinciales y/o nacionales no oficialistas; referentes de las fuerzas represivas; otros no manifestantes (vecinos que no participaban de la protesta, entre otros). Tomando el total de notas publicadas a lo largo de cada conflicto, surge la siguiente evolución:

Gráfico 2. Evolución de la presencia de emisores mayo de 2000 - junio de 2001. Diario Clarín



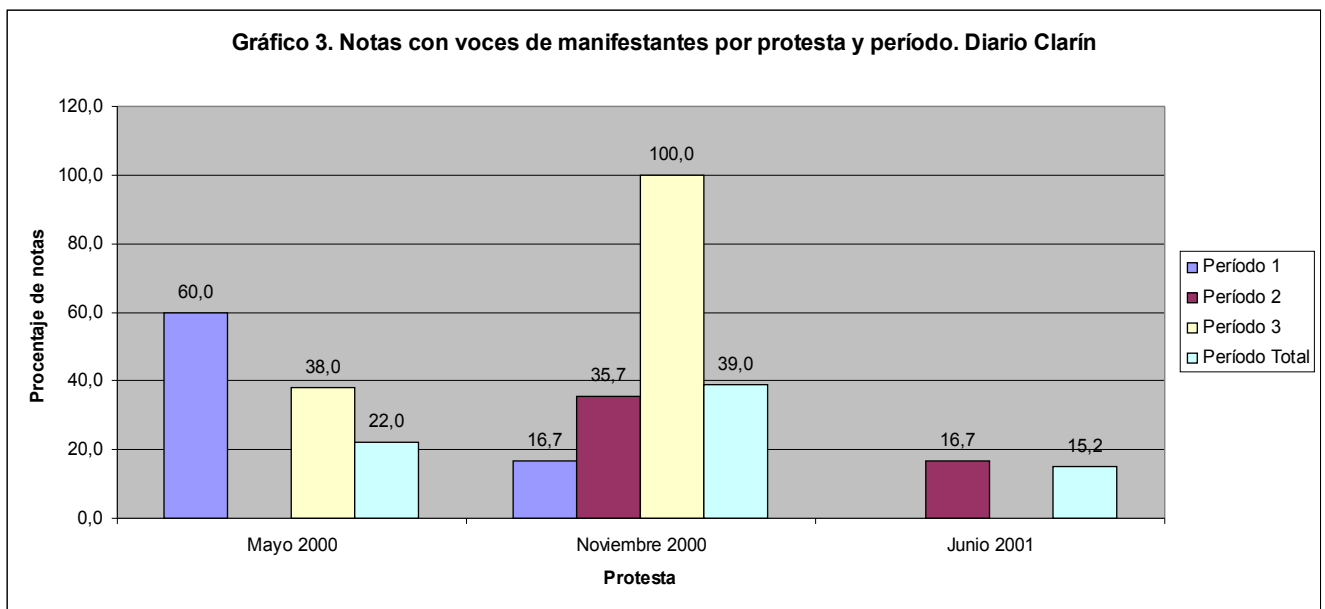
Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*

Como se ve, en el caso de las dos primeras protestas el emisor con mayor presencia fuera del periodista son los funcionarios y legisladores de partidos de gobierno a nivel nacional o provincial, que intervienen en 56 y 43 por ciento de las notas, seguidos de los manifestantes, que tienen voz en 22 y 39 por ciento de las notas de ese diario. La menor presencia de voces de los manifestantes es esperable tratándose de discursos hegemónicos, en particular en momentos en que el orden social está siendo cuestionado. Justamente, lo llamativo es que esa presencia no es para nada marginal en el caso del periódico con mayor influencia del país: nótese que en el conflicto de noviembre de 2000 los manifestantes aparecen en el 39 por ciento de las notas, una frecuencia apenas inferior que la de funcionarios y legisladores oficialistas. Esta constatación se puede dimensionar con más precisión si se comparan estas cifras con las de *El Tribuno*, donde los manifestantes figuran tan sólo en cinco por ciento de las notas publicadas durante el conflicto de mayo de 2000, y en 12 por ciento de las correspondientes al de noviembre de ese año.

Ya para el conflicto de junio de 2001 se puede advertir un desplazamiento: las notas en las que se expresan directa o indirectamente los manifestantes retroceden a 15 por ciento, lo que es menor al lugar cedido a los voceros de las fuerzas represivas, que aparecen en un 18 por ciento de los artículos. También se agranda la brecha con la presencia de voces de funcionarios y legisladores oficialistas, que ahora duplican a las de los manifestantes. Con todo, la intervención de estos últimos muestra una tendencia decreciente a lo largo de los tres conflictos: del 56 por ciento de mayo de 2000 desciende a 39 en noviembre y a 30 por ciento en junio de 2001. Estas modificaciones sugieren dos tendencias: por un lado, a medida que la crisis política y social se va agravando, se va erosionando la legitimidad de los referentes políticos del poder, quienes pierden espacio frente a los manifestantes. Por el otro, cuando esa crisis alcanza un grado de desarrollo que empieza a amenazar la continuidad del orden político imperante, es decir, cuando se acelera la crisis de hegemonía, como ocurre hacia mediados de 2001, ambos son desplazados por referentes del aparato represivo y judicial. Éste último, de hecho, sólo aparece el tercer conflicto como emisor.

Adviértase que si en el último conflicto se agregan las voces de funcionarios y legisladores de partidos de gobierno, funcionarios del poder judicial y referentes de las fuerzas represivas, es decir las manifestaciones de las distintas instancias del Estado, se supera el 60 por ciento de intervenciones; la suma de voces de los manifestantes y quienes actuaron como sus aliados, dirigentes sindicales y políticos opositores, representa poco más de la mitad, un 33 por ciento de las intervenciones que tienen espacio en los artículos informativos. Por su parte, las intervenciones de los manifestantes son superadas en el tercer conflicto por las de “otros no manifestantes”, que ganan terreno como sujetos capaces de dar testimonio de lo ocurrido.

Otra cuestión relevante es el momento específico dentro de cada protesta en que se da o se niega espacio a los distintos actores, en particular a los protagonistas de la lucha. Veamos:



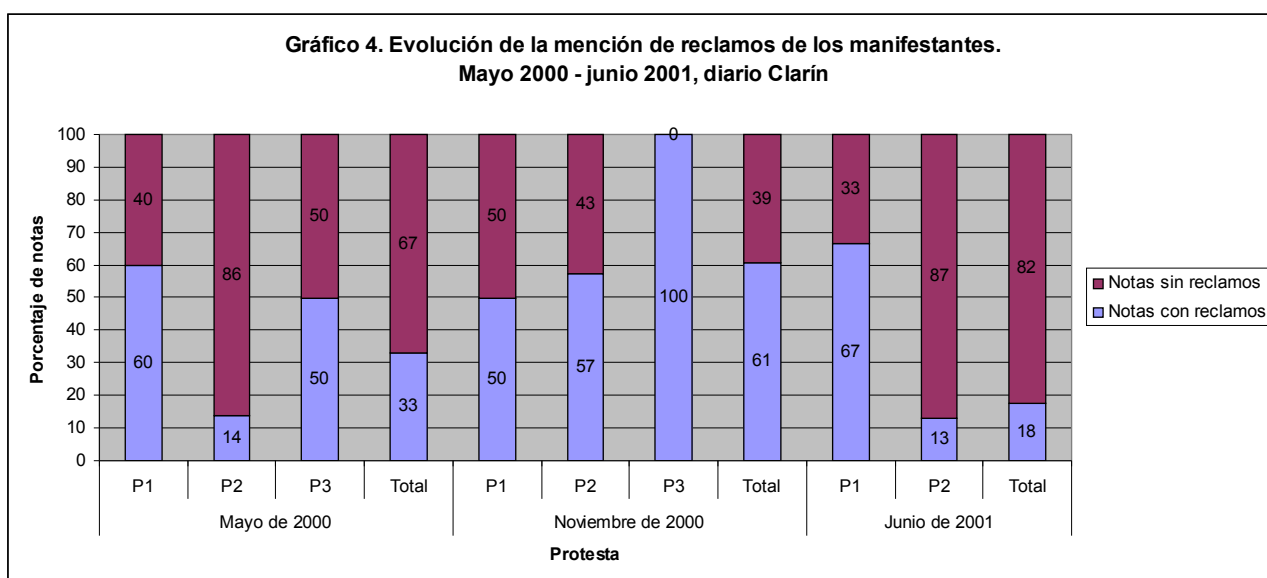
Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*

En la primera protesta, llama la atención que en el momento de la rebelión popular, es decir en el período 2, ningún artículo de *Clarín* recoge ni se interesa por los planteos de los manifestantes. Coincidentemente, *El Tribuno*, poco proclive a otorgar espacio para la voz de estos últimos, también les niega toda posibilidad de expresión durante el segundo período de mayo de 2000, cuando protagonizan las acciones más radicalizadas. En contraste con lo anterior, *Clarín* habilita la voz de los manifestantes en el 60 por ciento de las notas del primer período, cuando es de esperar que se informe sobre las causas de la protesta. Este rasgo de los discursos que produce y reproduce el principal diario del país no se repite en las siguientes luchas. Las intervenciones de los protagonistas de las protestas durante el primer período disminuyen abruptamente en noviembre de 2000 y desaparecen en junio de 2001. En cambio, sus voces aparecen en estas dos últimas protestas en los días signados por la represión y la rebelión popular, de los que habían sido excluidos en mayo de 2000. Finalmente, es notorio que todas las notas del día posterior a la firma del acuerdo en noviembre de 2000 incorporen intervenciones de los manifestantes.

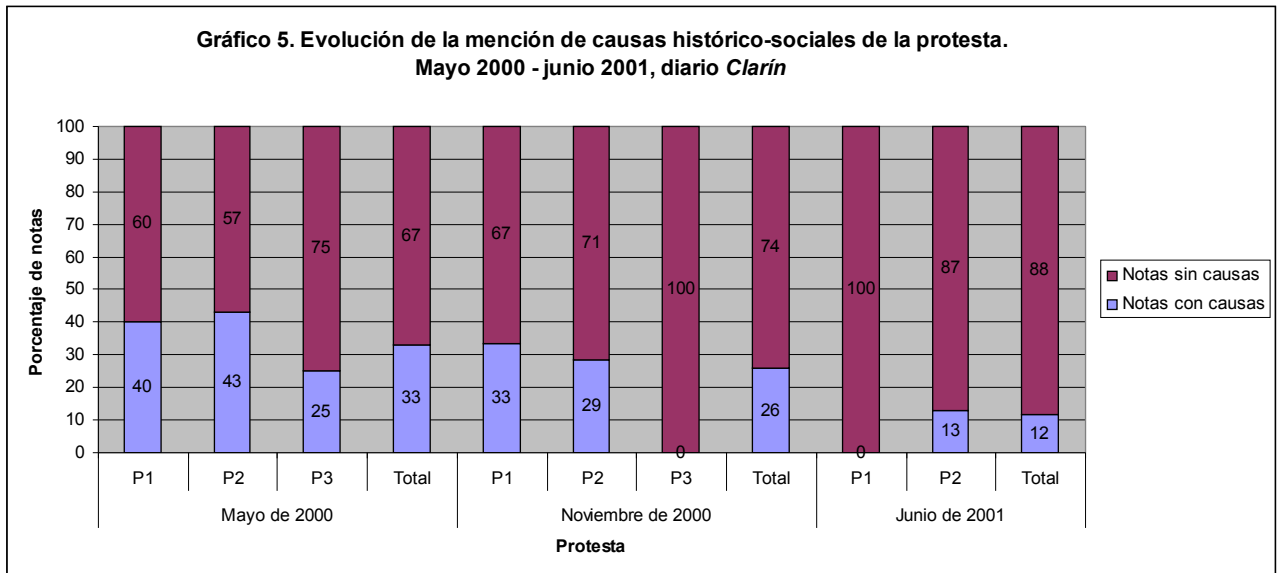
De conjunto parece verificarse un corrimiento temporal de las intervenciones de los manifestantes, que puede vincularse a la evolución de la crisis de hegemonía. Las voces que aparecen durante los primeros días de la protesta de mayo de 2000, capaces de justificar los motivos de la medida de lucha, tienden a silenciarse en los conflictos posteriores, pero en la medida en que desafían exitosamente a un régimen político en crisis, recuperan posiciones en las siguientes etapas de las protestas, en este sentido los

discursos hegemónicos dan cuenta de la propia crisis de hegemonía. Revisemos esta hipótesis a la luz de otros elementos del contenido general de los artículos periodísticos.

Desde el punto de vista de las representaciones de los manifestantes y sus acciones, la mención en los artículos de los reclamos que se efectúan y de las causas que originan el conflicto, más allá de cuáles sean específicamente, contribuye a crear una visión legitimante o deslegitimante del conflicto: la enumeración de medidas de fuerza desprovistas de reclamos y de causas explícitas favorece una representación de acciones inmotivadas, sin justificación. En este sentido, es pertinente examinar entre las notas del *corpus*, cuántas mencionan reclamos de los manifestantes y cuántas mencionan las causas sociales e históricas del conflicto. En este último ítem, se trata de indagar, primero, si más allá de las reivindicaciones de los manifestantes, los artículos incluyen una interpretación de tipo social o histórica que contribuya a contextualizar el conflicto. Es decir, un artículo puede dar cuenta de lo que reclaman los manifestantes, pero los propios reclamos pueden aparecer como injustificados si no se presentan, a su vez, las causas profundas que intervienen para que se formulen las reivindicaciones del caso. Segundo, interesa analizar en los casos en que se mencionan, cuáles son esas causas sociales y/o históricas según cada periódico, porque de eso depende, una vez más, la legitimidad o no de la protesta. La sistematización de la cantidad de notas con y sin mención de reclamos y de causas sociales y/o históricas en el diario *Clarín*, teniendo en cuenta los distintos períodos, arrojó los siguientes resultados:



Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*



Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*

En la protesta de mayo de 2000, sólo un tercio de las notas del total incluyen reclamos de los manifestantes, y otro tanto sucede con la mención de causas sociales o históricas del conflicto. En un análisis por períodos, se ve que durante la primera etapa del conflicto, en la mayoría de las notas (60 por ciento) constan reclamos, proporción que se reduce drásticamente en la siguiente etapa (14 por ciento). En principio, es posible atribuir este hecho a un desplazamiento del centro de interés con bases objetivas: el segundo momento es el de la pueblada, por lo que la atención se centra en los nuevos acontecimientos que se registraron, es decir, la represión, el ataque a símbolos del poder económico y político, el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Con todo, estos nuevos acontecimientos pueden aparecer descontextualizados, si en los artículos predominaran descripciones de enfrentamientos y acciones violentas desconectadas de las causas que explican el conflicto más allá de la contundente respuesta de la población a la represión del corte de ruta. Si se atiende al porcentaje de notas con mención de causas, se debe concluir que no es esa la situación: casi la mitad (un 43 por ciento) de ellas incluye en el segundo período causas sociales o históricas del conflicto. La mención de reclamos en los artículos disminuye del primer período al segundo, pero la proporción de notas con consideraciones acerca de las causas de la protesta se mantiene. En este sentido, el cambio de énfasis en la mención de reclamos no parece afectar la representación primera de los manifestantes, sino que se vincula a la aparición de nuevas acciones que copan el escenario.

El momento inmediatamente posterior al acuerdo muestra una recuperación de las notas con mención de reclamos, que alcanzan la mitad del total, y la disminución de los artículos que incluyen causas sociales y/o históricas de la lucha. En este caso hay un nuevo corrimiento del foco: la resolución del conflicto requiere de la presencia de artículos que den cuenta de las concesiones realizadas a tal fin, las que necesariamente involucran las reivindicaciones de los manifestantes. La escasa mención de causas de origen en esta etapa viene a reforzar la idea de resolución del conflicto: si constaran causas como la pobreza o el desempleo -que figuran entre las más aludidas-, quedaría en evidencia que el conflicto no se ha solucionado realmente. Otro efecto posible de la escasa presencia de causas en esta etapa puede ser el reforzamiento discursivo de la efectividad del método de lucha. Que en este período se generalizó en todo el país. Para fortalecer esta hipótesis sería necesario incorporar datos adicionales, pero no resulta desatinado pensar que en un escenario de acuerdo que involucra y visibiliza concesiones, el borramiento de las causas que impulsaron a los sujetos a la acción favorece la asociación entre método de lucha y obtención de reivindicaciones, más allá de motivaciones que justifiquen o no las acciones.

Con relación a la presencia de reclamos, las tendencias señaladas para la protesta de mayo de 2000 se profundizan en noviembre de 2000, cuando se incrementa el porcentaje de notas con ese contenido en el segundo y tercer períodos, involucrando más de la mitad y la totalidad de las notas respectivamente. La mención de causas, en cambio, tiende a retroceder levemente en los primeros períodos, para desaparecer completamente en el tercero, lo que provoca un retroceso de un tercio de las notas totales en mayo de 2000 a un cuarto en noviembre de ese año. Ya para 2001 se advierte un quiebre: las notas con mención de reclamos alcanzan su punto más alto en el primer período (67 por ciento), pero se reducen drásticamente en el segundo (13 por ciento), sin que eso se vea compensado por una mención relevante de causas, ausente en el primer período y mínima en el segundo (13 por ciento). De conjunto, encontramos en junio de 2001 menciones de reclamos en un 18 por ciento de las notas y de causas tan sólo en 12 por ciento. El elevado porcentaje de presencia de reclamos en el primer período debe leerse a la luz de la escasez de notas: como surge del cuadro 1, *Clarín* publicó tan sólo tres artículos informativos sobre la protesta a lo largo de 18 días, dos de ellos mencionan los reclamos de los manifestantes. Visto así, la mención de reclamos es insignificante en todos los períodos del conflicto de junio de 2001 y lo mismo ocurre con la mención de causas. En este sentido, se puede registrar un desplazamiento en los discursos tendiente a minimizar causas y reclamos que contribuye a la construcción de

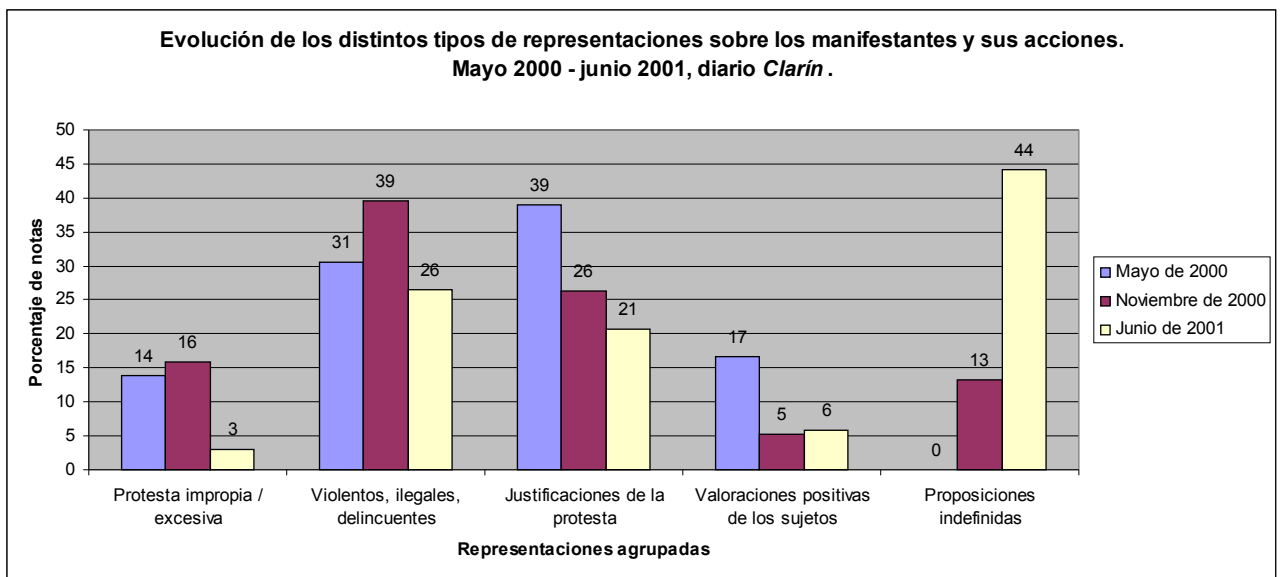
una representación deslegitimante de la protesta social, en momentos en que la crisis de hegemonía se encamina a su punto más elevado.

Hasta aquí, se han revisado los aspectos formales y los contenidos generales de los artículos periodísticos sobre el tema. En el siguiente apartado, se examinan específicamente las representaciones puestas en circulación.

Circulación de representaciones sobre las protestas y los manifestantes

Las representaciones sobre los manifestantes y sus acciones tienen un sentido específico que surge de la combinación de frases dentro de cada nota. Esta combinación da lugar a proposiciones que delimitan la táctica discursiva que se desprende del texto. De ahí que a fin de reponer las diferentes representaciones puestas en circulación, fue menester realizar un análisis exhaustivo de cada una de las notas que componen el *corpus*.

Para el caso de la protesta de mayo de 2000, se encontraron entre los artículos de *Clarín* 36 proposiciones sobre los manifestantes o sus acciones, para el de noviembre de 2000, 38 y para el de junio de 2001, 34. Partiendo de esas proposiciones pueden construirse cinco grupos diferentes. Los dos primeros reúnen representaciones de tipo negativas, los dos que siguen positivas, y el quinto corresponde a proposiciones indefinidas. En ese orden, distingo primero las representaciones que sugieren que se trata de una protesta impropia o excesiva, y segundo las proposiciones que presentan a los manifestantes como sujetos violentos, propulsores de acciones ilegales y/o como delincuentes. Pasando a las proposiciones que formulan representaciones de tipo positivo, se pueden diferenciar las que tienden a justificar la protesta, de aquellas que valoran positivamente a los manifestantes. Finalmente hay notas que se refieren a los manifestantes y/o a sus acciones, aunque no sea posible determinar una dirección precisa. Partiendo de esta clasificación, obtuve los siguientes resultados para el caso de *Clarín*:



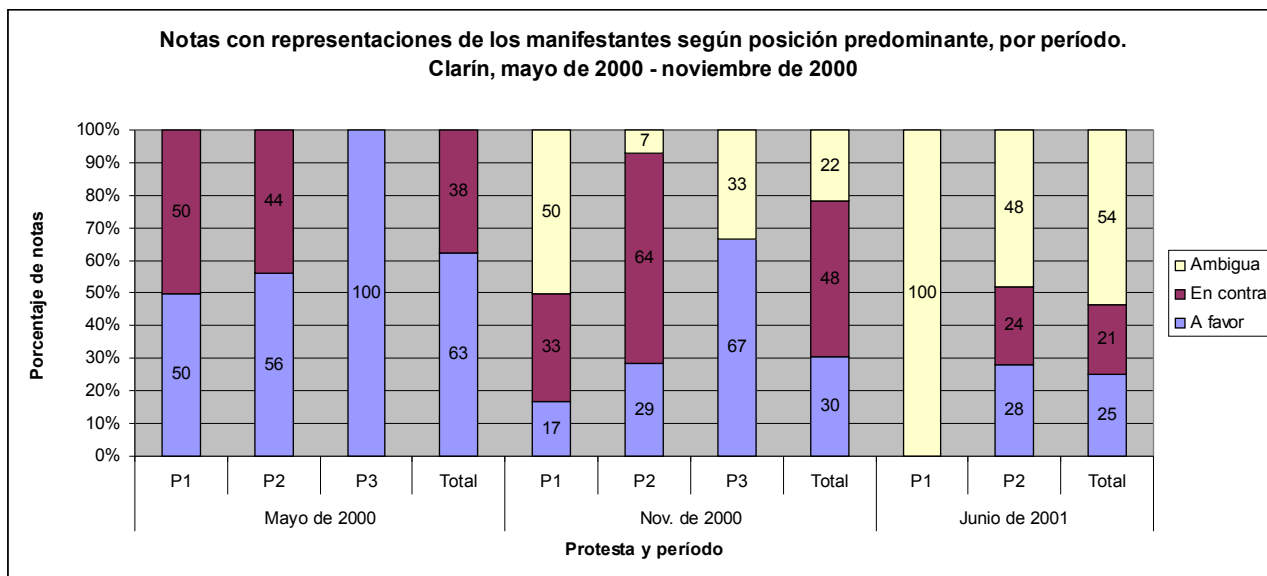
Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*

En el gráfico se pueden advertir dos tendencias continuas entre mayo de 2000 y junio de 2001, una de descenso y otra de ascenso. La primera se verifica con relación a las justificaciones de la protesta, que pasan de 39 por ciento al inicio del proceso de luchas bajo análisis a 21 por ciento en el contexto de la última. Pero al contrario de lo que se podría suponer, las representaciones negativas no tienden a incrementarse, sino más bien a caer después de incrementarse en la protesta de noviembre de 2000. Lo que se observa, en cambio, es una tendencia continua de incremento de las notas con proposiciones indefinidas, que de estar ausentes en la primera acción de lucha, llegan a 13 por ciento en la segunda y alcanzan un 44 por ciento en junio de 2001, la proporción más importante registrada entre todas las categorías de las tres protestas.

En noviembre de 2000 se nota un cambio con relación al mes de mayo de ese año. El hecho de que disminuyan las representaciones positivas y avancen las negativas sugiere una nueva estrategia de representación, que favorece la deslegitimación de los manifestantes. Así, se refuerzan elementos que ya tenían presencia en la primera lucha aunque con menor peso relativo: las ideas de que la protesta es impropia y/o desmedida y de los manifestantes como sujetos delictivos y violentos avanzan al tiempo que disminuyen las justificaciones y las valoraciones positivas de los protagonistas de la lucha. Interesa señalar en este punto es que esa estrategia no parece haber perdurado: para junio de 2001 las representaciones negativas que se habían fortalecido se debilitan nuevamente, junto a los discursos capaces de legitimar las acciones colectivas en cuestión. El incremento paralelo de los artículos con proposiciones indefinidas sugiere

nuevamente el advenimiento de la crisis orgánica, donde los discursos hegemónicos pierden claridad al tiempo que se licúan las bases consensuales del orden dominante.

Consideremos ahora el conjunto de artículos publicados a lo largo del proceso de luchas de acuerdo a su posición predominante, distinguiendo en cada caso el período previo a la represión, el que se extiende desde la represión al momento previo a la firma del acuerdo con las autoridades, y la jornada posterior a esa firma.



Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*

En mayo de 2000 las notas predominantemente en contra de los manifestantes en ningún período superan el 50 por ciento de las publicadas en *Clarín*, configurando una virtual paridad con los artículos predominantemente favorables durante los dos primeros momentos. En este sentido, las tendencias principales del discurso de *Clarín* durante el conflicto no se ubican en el terreno de la demonización de los manifestantes, sino que tienden a justificar sus motivos. El hecho de que la totalidad de los artículos publicados una vez que el conflicto fue desactivado tengan un posicionamiento general favorable ante los manifestantes, refuerza esa perspectiva.

Considerando los totales, se puede observar que los artículos que adoptan una posición predominantemente a favor de los manifestantes y sus acciones tienden a disminuir a lo largo del proceso de luchas 2000-2001, lo que indica una modificación en las estrategias discursivas que tiende a socavar la posición de los manifestantes. Ahora

bien, atendiendo a la primera y a la última protesta, llama la atención que también disminuyen las notas que se caracterizan por presentar un contenido mayormente opuesto. En cambio, las notas ambiguas, inexistentes en la protesta de mayo de 2000, son más de la mitad en junio de 2001, confirmando la impresión señalada en los últimos párrafos.

Si observamos el tipo de nota que predomina en los distintos períodos de cada protesta, se ve el mismo avance de las notas ambiguas, particularmente en el primer período, cuando la lucha no alcanza su punto de mayor conflictividad. De un equilibrio entre notas predominantemente positivas y negativas al comienzo de la primera protesta, se pasa a una presencia de un 50 por ciento de notas ambiguas en la segunda, y a un 100 por ciento en la tercera. En la protesta de noviembre de 2000, cuando se produce la pueblada las ambigüedades ceden algo de terreno a las notas negativas. Sin embargo, al igual que en mayo de ese año, éstas últimas desaparecen el día posterior a la firma del acuerdo. En este punto, la diferencia entre ambas protestas es que en mayo de 2000 encontramos que la totalidad de las notas publicadas en el tercer período son de tendencia positiva, mientras que en noviembre de 2000 esa unanimidad está debilitada por las notas ambiguas.

Veamos ahora cuál es el contenido específico de las representaciones propuestas en cada etapa. Como se desprende del gráfico 6, si exceptuamos las proposiciones indefinidas, los grupos de categorías con mayor presencia en todos los conflictos son el que construye a los manifestantes como violentos, ilegales o delincuentes, y el que contiene distinto tipo de justificaciones de la protesta. Estos grupos pueden desagregarse en las siguientes proposiciones:

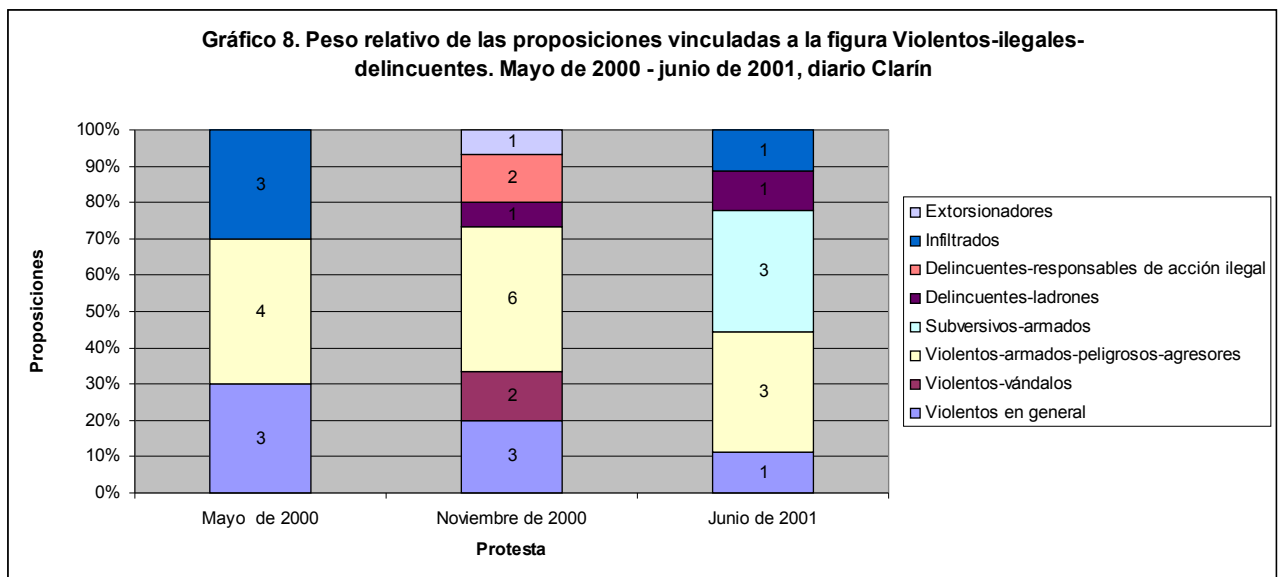
Cuadro 2. Proposiciones desagregadas de los grupos de representación más frecuentes

Violentos, ilegales, delincuentes	Justificaciones de la protesta
Violentos en general	Víctimas del desempleo-reclamos legítimos
Violentos-vándalos	Víctimas del desempleo-protesta justificada
Violentos-armados-peligrosos-agresores	Víctimas de exceso represivo
Violentos-combatientes	Enfurecidos por represión brutal
Subversivos-armados	Protagonistas de protesta comunitaria masiva
Delincuentes-ladrones	Desoídos-Ignorados por las autoridades
Delincuentes-responsables de acción ilegal	
Infiltrados	
Extorsionadores	

Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*

Cabe aclarar que en el diseño de estas categorías se buscó establecer el mayor nivel de especificidad posible respetando los contenidos de las notas. Siguiendo este criterio, en la primera columna del cuadro 2 se listan las distintas representaciones asociadas al agregado *Violentos, ilegales, delincuentes*. El tópico “violentos”, en los casos en que se presenta, se desagrega según los diferentes tipos de violencia asignados a los manifestantes, que aparecen como vándalos, armados-peligrosos-agresores o como una fuerza de choque. Utilizo la representación “Violentos en general”, cuando las significaciones no se ajustan a ningunas de las otras categorías listadas del tópico “violentos”. Con relación al ideograma “subversivo”, fuertemente vinculado a la represión estatal y para-estatal de los años ‘70s, opté por distinguirlo de los anteriores. Por su parte, se especifica la figura “delincuente” según se vincule a los manifestantes con acciones de robo o a la propia iniciativa de bloquear la ruta, que es considerada ilegal. Las últimas dos representaciones se vinculan a la idea de que hay infiltrados entre los manifestantes, generalmente agentes externos con relación a la sociedad local que se montan sobre la protesta y que alientan la violencia, y la idea de que los manifestantes aprovechan la oportunidad para extorsionar a quienes esperan atravesar el corte de ruta.

En la segunda columna del Cuadro 2 se listan las diferentes representaciones tendientes a justificar la protesta. La representación de los manifestantes como víctimas del desempleo o la pobreza opera legitimando reclamos o justificando la acción de lucha en los dos primeros casos, y en el tercero y cuarto la represión desmedida de las fuerzas de seguridad tiende a justificar el estallido de las puebladas. Las ideas de que se trata de protestas comunitarias de carácter masivo, y de que los manifestantes no han sido escuchados por las autoridades contribuyen a su vez a legitimar las acciones de lucha. Dicho esto, veamos cuál es el peso relativo dentro del grupo de representaciones vinculadas a la figura *Violentos, ilegales, delincuentes*.



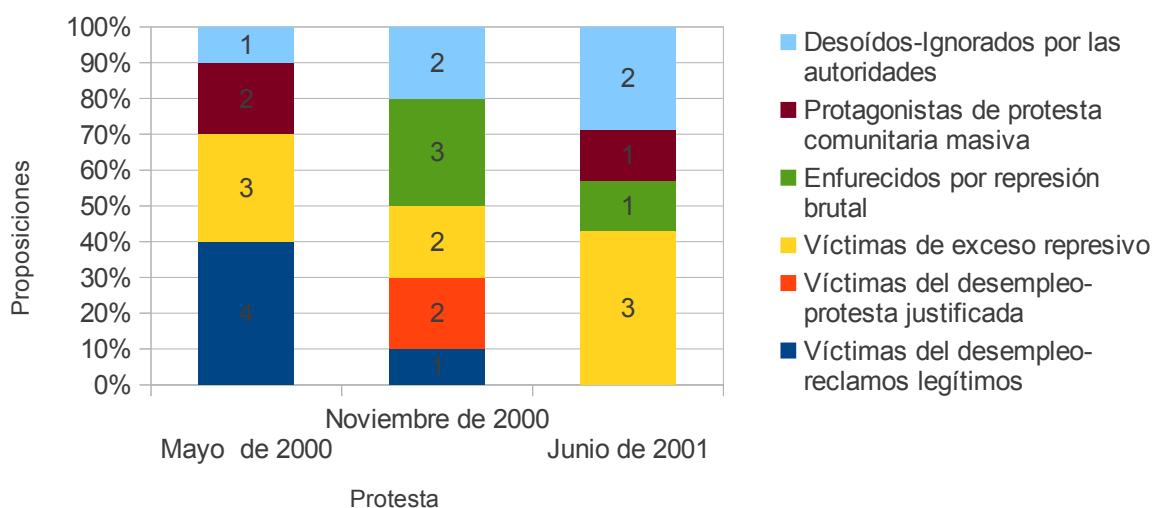
Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*

Lo primero que salta a la vista en el gráfico es la diversificación de representaciones que se produce después de la primera protesta. La figura del “infiltrado” desaparece en la segunda lucha, y es retomada en tan sólo una nota en la tercera. Entre las representaciones ausentes en mayo de 2000 que aparecen en noviembre de ese año, encontramos la del vandalismo, la del delincuente común, la de la extorsión y la de sujetos que actúan ilegalmente por el hecho de bloquear la ruta. Eso no implica, sin embargo, un debilitamiento de la representación de los manifestantes como sujetos violentos, armados y peligrosos, que es la que aparece dentro del grupo analizado con mayor frecuencia en todas las protestas. Es pertinente destacar a su vez que en junio de 2001 se formula una nueva representación que ocupa junto a la anterior el primer lugar en cuanto a repeticiones: la de subversivos-armados. La construcción de los manifestantes como sujetos armados y peligrosos parece aquí dar lugar a una proposición más exacerbada, recurriendo a la figura del subversivo. Llama la atención el hecho de que esta última aparezca en *Clarín* recién en 2001, porque en el caso de *El Tribuno* está presente desde la primera protesta. Lo mismo ocurre en el caso del periódico salteño con las representaciones de los manifestantes como extorsionadores, violentos-vándalos, violentos-combatientes, delincuentes-responsables de acción ilegal, delincuentes-ladrones (Benclowicz, 2013a).

Con relación a la diversificación de representaciones negativas, es posible pensar que se pasa de un primer momento de relativa certeza acerca de qué es lo que ocurre en las descripciones de *Clarín*, a un mayor grado de indefinición en la segunda protesta, que deriva en la adopción de sentidos que ya circulaban en otros diarios, pero que

Clarín se guardó inicialmente de reproducir. Aquí se expresa, más allá de la línea editorial, la tendencia a la formación de una estrategia general de los discursos dominantes, producida y reproducida por los medios masivos. Evidentemente, algo ocurrió hacia mediados de 2001 que llevó al periódico más leído del país a incorporar una representación vinculada a la profunda impugnación del orden social imperante que se registró durante la década de 1970. Así es que los piqueteros, que se cuentan entre los luchadores más radicalizados en los albores del siglo XXI, son pensados, ante la profundización de la crisis del orden político, como los impugnadores radicales del pasado reciente. De un modo específico, la evolución de las principales representaciones positivas acompaña ese movimiento:

Gráfico 9. Peso relativo de las representaciones vinculadas a justificaciones de la protesta. *Clarín*, mayo de 2000 - junio de 2001



Fuente: elaboración propia en base a las ediciones de *Clarín*

Como se puede ver, las justificaciones más estructurales que se despliegan en mayo y noviembre de 2000 -la construcción de los manifestantes como víctimas del desempleo, y la presentación de la protesta como una consecuencia de este último- desaparecen en junio 2001. Los planteos esgrimidos, de carácter coyuntural, indican un cambio cualitativo en función del cual el frágil orden imperante ya no es puesto en cuestión: si se justifica parcialmente a los manifestantes ya no es por sus propios derechos, sino por los excesos de las fuerzas represivas y por la falta de disposición al diálogo de las autoridades. De hecho, como se vio en el gráfico 5, en esta última protesta se alcanza el récord de 88 por ciento de artículos en los que no se mencionan causas sociales o históricas de la lucha. En ese escenario, la violencia de unos y otros

emerge como el elemento explicativo más poderoso de lo que ocurre. De este modo se recurre una vez más a una estrategia discursiva fuertemente instalada desde los años 70s, en la que dos agentes violentos victimizan a una sociedad inocente. Hasta cierto punto, es posible pensar que a nivel local semejante estrategia fue exitosa, de hecho, después de junio de 2001 ya no se registraron protestas de la misma envergadura, y la valoración negativa del movimiento piquetero en Tartagal y Mosconi se acrecentó (Benclowicz, 2011a). Con todo, las representaciones sobre las puebladas del norte de Salta jugaron un papel relevante en el proceso de radicalización general a nivel nacional, que culminó, ese mismo año, con la caída del presidente Fernando de la Rúa tras las masivas jornadas del 19 y 20 de diciembre. En este sentido, la estrategia demonizadora fracasó. Las moderadas reformas instrumentadas a partir de 2003 requirieron pensarse en el contexto de ese fracaso.

Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo procuré examinar los cambios y continuidades en las estrategias discursivas en el proceso de luchas registrado entre mayo de 2000 y junio de 2001 en Tartagal y Mosconi, siguiendo las noticias publicadas por el diario con mayor difusión en Argentina. A nivel nacional, el período registra una creciente agudización de los conflictos sociales y la crisis del orden político, que culmina a fines de 2001 con la caída del presidente Fernando de la Rúa. La relación entre esa agudización y las representaciones desplegadas en el principal periódico del país demostró ser compleja y contradictoria.

Hacia el inicio del proceso, llama la atención la presencia mayoritaria de un conjunto de representaciones favorables a los manifestantes, que tienden a justificar sus acciones, lo cual contrasta con la estrategia discursiva de diarios como *El Tribuno*, que construye un relato criminalizador de los sujetos en lucha. Para principios del año 2000, el nuevo gobierno de la Alianza contaba con el capital político de una amplia y reciente victoria electoral, aunque la crisis socio económica no morigeraba su ritmo. A medida que la crisis avanza y la legitimidad del orden político se licúa, se nota en *Clarín* un retroceso sistemático de las representaciones positivas, que sin embargo no se ve acompañado por el aumento paralelo de las caracterizaciones negativas, sino que estas últimas también tienden a descender si se considera el proceso en su conjunto, y lo mismo ocurre con el espacio que se otorga a las voces de funcionarios y legisladores del régimen. Vinculé este hecho a la evolución de la propia crisis: en la medida en que en

2001 se experimentó una verdadera crisis orgánica en la Argentina, en el marco de la cual las clases dominantes no lograban reproducir su hegemonía sobre la sociedad, los propios discursos hegemónicos, en este caso el de los artículos periodísticos más difundidos, perdían su capacidad de interpretar los sucesos y de interpelar a la sociedad.

Así, los acontecimientos registrados en Tartagal y Mosconi, que figuran entre los principales fenómenos de lucha social en la convulsionada Argentina de la época, son contruidos hacia mediados de 2001 con fuertes indefiniciones, que reflejan la incapacidad de desarrollar una estrategia discursiva a un tiempo creíble y disciplinadora. Próximos trabajos deberán ampliar tanto geográfica como temporalmente el estudio de estos discursos, así como indagar de que modos fueron recepcionados, a fin de analizar su incidencia en el propio proceso de luchas.

Bibliografía citada

Benclowicz, J. D. (2011a). “Continuities, scope and limitations of the Argentine picket movement”, en *Latin American Perspectives*, N° 176 vol. 38, pp . 74-87.

Benclowicz, J. D. (2011b). “Repensando los orígenes del *movimiento piquetero*. Miseria y experiencias de lucha antes de las contrarreformas de la década de 1990 en el norte argentino”, en *Latin American Research Review*, Vol. 46, N° 2, pp. 79-103.

Benclowicz, J. D. “Las luchas sociales a través de los medios masivos. Una propuesta de análisis cualitativo y cuantitativo de sus representaciones desde un estudio de caso” en *Aposta*, en prensa, 2013a

Benclowicz, J. D. *Estado de malestar y tradiciones de lucha*, Buenos Aires, Biblos, 2013b.

Díaz Muñoz, Marco, *Orden represión y muerte*, Buenos Aires, Tierra del Sur/Colectivo La Rabia, 2005

Fairclough, N. (1993) *Discourse and Social Change*, Cambridge, Polity Press.

Oviedo, L. (2001) *Una historia del movimiento piquetero*, Buenos Aires, Rumbos.

Van Dijk, T. (1990). *La noticia como discurso*, Barcelona, Paidós.

Van Dijk, T. (2008) *Ideología*, Buenos Aires, Gedisa.

Verón, E. (1993) *La semiosis social*, Barcelona, Gedisa.